

INTRODUCCION

El reto al que se enfrentó Honduras, después del paso del huracán Mitch, ha significado una serie de acciones para alcanzar las metas de reconstrucción y, principalmente, para avanzar en la ruta de la transformación nacional. En esta tarea se han articulado los mejores esfuerzos del Gobierno y la sociedad civil, con el significativo apoyo de la Comunidad Internacional, bajo un enfoque de compromiso compartido de encaminar al país hacia los objetivos plasmados en el PMRTN y en la Declaración de Estocolmo.

La magnitud de los esfuerzos ha sido considerable y en el proceso se ha dado un continuo aprendizaje de cada una de las partes; gracias a lo cual podemos afirmar que los avances han sido significativos. No obstante, también se reconoce que el proceso no ha sido fácil y que todavía hay obstáculos que retrasan o impiden el logro de mayores resultados. La superación de tales valladares es el gran desafío a ser atendido en el breve plazo, a través de un continuo y acrecentado esfuerzo de los distintos sectores que conforman la sociedad hondureña.

Los avances logrados en materia de reconstrucción están permitiendo que cada vez cobren mayor fuerza las prioridades relacionadas con el tema de la transformación nacional, que en muchos casos demanda cambios a la institucionalidad tradicional. Es claro que este último es un reto mucho mayor que la misma reconstrucción, cuya delimitación en el tiempo es difícil de ubicar. Los marcos legales pueden cambiar paulatinamente, pero cambios a actitudes demoran más.

Un logro de alto significado para la gobernabilidad y el devenir histórico del país, y de sustancial apoyo a la transformación nacional, es el trabajo conjunto que se ha podido desarrollar entre el Gobierno y la sociedad civil. Esta muestra de apertura hacia la participación democrática se ve acompañada por la búsqueda continua de nuevos y mayores espacios de participación ciudadana.

Esta sinergia positiva, se concretiza en el funcionamiento pleno de mecanismos de coordinación entre los Gabinetes Especial de la Reconstrucción y Social, la Comisión de Participación de la Sociedad Civil y el Grupo de Seguimiento de los Cooperantes. Estas instancias se reúnen periódicamente con el fin de identificar acciones que permitan impulsar el proceso de reconstrucción y transformación nacional.

Lo anterior también se ha traducido en la preparación de la Matriz de Indicadores de Seguimiento a los Principios de Estocolmo, acordada de manera conjunta entre Gobierno, sociedad civil y cooperantes a mediados del 2000. Asimismo, se han puesto en funcionamiento 13 Grupos Sectoriales de Trabajo, bajo la coordinación gubernamental pertinente, cuyo propósito principal es velar por el avance de dicha matriz. El funcionamiento de este mecanismo ha permitido, entre otros, el perfeccionamiento de algunos indicadores y la formulación de observaciones e informes sobre el proceso.

Parte de estos esfuerzos de trabajo coordinado orientan y dan contenido al presente informe, en el cual se sintetizan las principales acciones que se han llevado a cabo en los últimos meses, hasta diciembre de 2000. En tal sentido, el Informe toma como referencia principal los principios de la Declaración de Estocolmo; y una serie de aspectos prioritarios que han venido siendo definidos en el marco tripartito de los Grupos Sectoriales de Trabajo.

En el tema de **reducción de la vulnerabilidad social**, destaca en primera instancia la formulación de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. La Estrategia es el resultado de un amplio proceso de consulta con la sociedad civil, en el cual se ha escuchado a lo largo y ancho del país el parecer de grupos organizados e individuos que viven la pobreza. Como resultado, la estrategia representa una posición nacional e incluye elementos que coadyuvan a su soste-

nibilidad, a través de su conversión en una política de Estado. Entre las grandes coincidencias identificadas en la consulta nacional, para su consideración en el documento resaltan: el impulso del crecimiento en pro de los pobres; acciones en educación y salud; acceso a activos productivos y el mejoramiento a los procesos de transparencia y gobernabilidad. La priorización de acciones y asegurar un financiamiento congruente con la dimensión de la incidencia de la pobreza será el reto mayor en la ejecución de la Estrategia. En el segundo semestre de 2001, se espera que los mecanismos correspondientes estén funcionando para poner en marcha la Estrategia.

Luego de llegar a un consenso sobre una Propuesta de Transformación de la Educación Nacional, se avanza en la metodología para hacer operativa su ejecución. El marco institucional está instalado y se han iniciado pasos en las áreas de reforma curricular, formación de docentes y gestión educativa. Para estos ejes ya se encuentran en ejecución programas que cuentan con asistencia técnica y financiera; entre ellos están modelos de educación que privilegian la participación comunitaria en la gestión (PROHECO), introducción de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje (programas telebásica) y evaluación de la calidad de la educación.

En lo relativo al sector salud, se ha rehabilitado la infraestructura e iniciado un proceso de reformas con criterios de eficiencia y equidad; así como el fortalecimiento de las redes de seguridad social. Se han iniciado varias acciones para el fortalecimiento del papel de rectoría de la Secretaría de Salud (e.g. regulación de establecimientos y política nacional de medicamentos) y la descentralización y desarrollo local para la prestación de servicios de salud. Los programas de compensación social (FHIS y PRAF) se están vinculando cada vez más a la formación de capital humano y mejorando su coordinación con los ministerios rectores.

En cuanto a la **vulnerabilidad ecológica**, en materia de recursos naturales y ambien-

te, una de las lecciones más importantes después del huracán Mitch se relaciona con la necesidad de disminuir la vulnerabilidad del país frente a los desastres naturales. Para ello, se están realizando acciones tendentes a fortalecer el marco legal e institucional ambiental y los instrumentos de gestión de los recursos naturales y de ordenamiento territorial. De igual manera, se impulsa la descentralización y la participación social en el manejo de recursos naturales y la protección del ambiente. En estas tareas se usa la cuenca como unidad de referencia. Respecto a desastres, se ha fortalecido la institución coordinadora e instituido comités de emergencia municipal, además de contar con sistemas de medición y alerta temprana.

En la ruta hacia la transformación del país, se han buscado nuevos mecanismos que permitan consolidar las acciones en el campo de la **transparencia y la gobernabilidad**. El hito más sobresaliente en esta materia lo constituye el reciente nombramiento del *Consejo Nacional Anticorrupción*, integrado con amplia participación de la sociedad civil, el cual tendrá como principal función aprobar y ejecutar una *Estrategia Nacional Anticorrupción*, como política de Estado.

Asimismo, se ha puesto en marcha un programa orientado a elevar la transparencia y eficiencia en las compras y contrataciones del Estado. La presencia de un Consejo Consultivo, integrado tripartitamente, dará mayor transparencia al proceso. De forma similar, se han venido desarrollando mecanismos de rendición de cuentas que abarcan la contraloría y auditoría de proyectos. Mientras los sistemas de administración y evaluación de la gestión pública se han fortalecido.

Los avances logrados en el mejoramiento de la impartición de **justicia**, principalmente a partir del 2000, se evidencian en primer lugar por el amplio interés en todos los sectores de la sociedad por lograr una reforma del sistema de administración de justicia. La Comisión Especial de Notables para el Mejoramiento del Sistema Judicial presentó su pro-

puesta y a raíz de ello se vienen dando pasos concretos. El Congreso Nacional aprobó una enmienda constitucional para fortalecer la independencia del Poder Judicial.

De igual manera, se han producido progresos sustanciales en lo que respecta a la seguridad ciudadana, tanto de aspectos normativos como operativos, los cuales han contado en la mayoría de los casos con el respaldo de la ciudadanía. La policía nacional es ahora parte del estamento civil y su marco regulatorio avanza con la aprobación de la Ley Orgánica, estando pendiente su Reglamento. Un Plan de Seguridad de las Personas y sus Bienes fue ampliamente consultado y está en su etapa final de aprobación.

En el tema **Democracia, Gobernabilidad y Derechos Humanos**, se destacan los esfuerzos por asegurar los espacios que permitan desarrollar el compromiso de la sociedad civil en el proceso de reconstrucción y transformación nacional. En el área de descentralización se ha reactivado la Comisión Ejecutiva de Descentralización y se ha iniciado la transferencia de funciones en ciertas áreas como: agua, salud, educación e inversión social. Referente al fortalecimiento de los gobiernos locales, se ha trabajado en áreas relacionadas a información y fortalecimiento municipal; y en lo relativo al tema de participación comunitaria, se han abierto espacios en educación, salud, planificación de inversión municipal y mantenimiento de obras comunales. Asimismo, se continúan haciendo esfuerzos orientados a mejorar la situación de los derechos humanos de la población, en especial de algunos grupos tradicionalmente excluidos, como las mujeres, los grupos étnicos y la niñez.

En relación a los temas de **Economía y Producción**, destacan aspectos relativos a la estabilidad macroeconómica y a los sectores productivos. Durante los últimos años, la gestión macroeconómica ha venido sentando las bases para la estabilidad financiera y un mayor crecimiento equitativo y sostenible. Al cierre del 2000, el nivel global del PIB superó el monto pre-huracán Mitch; la inflación muestra

una tendencia decreciente ubicándose alrededor de 10%, la tasa más baja desde 1993; las tasas nominales de interés se han reducido y la expansión del crédito bancario al sector privado es congruente con el ritmo de actividad económica sin generar presiones inflacionarias. El sistema financiero se encuentra sólido y bajo una mejor supervisión; el gasto público se ha mantenido bajo control y se registran avances en la recaudación tributaria; el déficit fiscal no ha llegado a niveles incontrolables y es financiado con recursos externos y la pesada carga del servicio de la deuda se ha aligerado como resultado de los acuerdos de alivio del servicio de la deuda.

Por otra parte, gradualmente, se han llevado a cabo reformas de política para elevar la eficiencia en la prestación de servicios e incentivar la participación de agentes privados. Además, se han logrado avances sustantivos en la integración regional, destacando la ratificación del Congreso Nacional del Tratado de Libre Comercio con México y los avances en las negociaciones con República Dominicana y Chile, entre otros; además de los esfuerzos por adecuar al país a las normas de la OMC y la suscripción de convenios para la protección recíproca de inversiones.

En lo que respecta a los sectores productivos, los esfuerzos han estado principalmente dirigidos a la rehabilitación de la infraestructura productiva dañada principalmente del sector agropecuario y de la micro, pequeña y mediana empresa; fortalecer y modernizar el sector financiero; y crear condiciones para potenciar el desarrollo de sectores claves con alta capacidad de generación de empleos e ingresos.

En materia de **Infraestructura Social y Vial**, cabe destacar que no solamente se ha tratado de reconstruir el patrimonio perdido, sino también de mejorar la calidad de los servicios en aras de transformar el país, y hacerlo menos vulnerable a eventuales desastres naturales. Es así que en el sector vivienda y ordenamiento urbano se trabaja en aspectos del marco legal e institucional con la elaboración de un anteproyecto de Ley para la Mo-

modernización del Sector Vivienda y el fortalecimiento de SOPTRAVI como institución normadora del sector. En cuanto a soluciones habitacionales se están construyendo 59,520 unidades en 163 municipios a un costo total de L 1,594.5 millones; a la par de la construcción de las unidades se está trabajando en aspectos de provisión de servicios. Simultáneamente, en un contexto más amplio, se han emprendido acciones para modernizar el Registro de la Propiedad; y, asegurar un desarrollo urbano apropiado, respetando normas, especificaciones, sistemas y materiales de construcción.

En adición a rehabilitar los sistemas de agua y saneamiento dañados, se realizan acciones para: i) elevar la eficiencia de los sistemas manejados por el SANAA; ii) fortalecer la capacidad municipal en la provisión de servicios sostenibles de agua potable y saneamiento; y, iii) elevar la participación de grupos organizados. También se trabaja en la concertación de un Plan Nacional de Agua y Saneamiento y nuevos marcos legales.

A lo largo de los dos últimos años se ha restaurado gran parte de la red vial, lo que incluye 1,121 Kms. de carreteras principales y 2,704 Kms. de caminos rurales. Además, se ha dado mantenimiento y mejorado 4,526 Kms de la red vial, con recursos del Fondo Vial, SOPTRAVI y el Fondo Cafetero. Durante el presente año, se pretende ampliar el mantenimiento a más del 60% de la red. Asimismo, se culminó la construcción de 19 puentes nuevos, equivalentes a 1,376.4 metros; para finales del 2001 se completarán 12 puentes más, con una longitud de 1,919 metros.

Con el fin de dar mayor sustentación a la reconstrucción y transformación nacional, uno de los principios de la Declaración de Estocolmo se orienta a mejorar la **coordinación con los cooperantes**. En este sentido, uno de los mecanismos principales lo constituye el Grupo de Seguimiento de los Cooperantes, y su interacción con las entidades del sector público y de la sociedad civil. Uno de los resultados relevantes de la mejora en la coordinación es sin duda el alto porcentaje de recursos de cooperación (cerca del 80% del total indicado en Estocolmo) que han sido suscritos, tanto con organismos bilaterales como multilaterales. Esto demuestra además de un alto grado de apoyo de la comunidad internacional su confianza en la marcha del proceso.

Tal como se ha mencionado, las tareas de la reconstrucción han sido titánicas y han demostrado el alto grado de compromiso del Gobierno de impulsarlas de la mejor manera posible, contando con el apoyo de la sociedad y con la oportuna cooperación de la comunidad internacional. Sin embargo, con el compromiso de la hondureñidad en su conjunto, es indudable que el país alcanzará los objetivos propuestos. Uno de los pasos más firmes en esta dirección lo constituye la decidida voluntad por llevar adelante la formulación final de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y otras reformas indispensables en áreas claves para el desarrollo nacional; proceso en el cual se han abierto los espacios de participación y trabajo coordinado entre Gobierno, sociedad civil y entidades cooperantes.